

No. del Resolutivo: **RCT\_3435\_2024**

En la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, el **13 de noviembre de 2024**, mediante el Acta de la **CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA -CXCVIII-**, este Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

### **ANTECEDENTES**

**ÚNICO.** Mediante oficio **SP/UEAI/C/1065/2024** del **11 de noviembre de 2024** el licenciado **Francisco Javier Cruz Rojas**, Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP), solicita se confirme la **CONFIDENCIALIDAD** de la información con motivo de la solicitud tramitada bajo el folio interno **61474**, correspondiente al folio PNT **111100500409924**, que cita:

*« Quiero solicitar información acerca de si se encuentra recluso de manera preventiva o definitiva (...) con CURP (...), en las instalaciones del Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) Guanajuato.*

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO. COMPETENCIA.** Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver las solicitudes clasificación de información, así como validar versiones públicas. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en los artículos 43, 44 fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 51, 52, 53, 54 fracciones I y XII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, 17, 19, 22 fracciones V y X, 23, 24, 25 y 31 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato, así como los numerales Segundo, Séptimo y Sexagésimo segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.

**SEGUNDO. REVISIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.** En términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, la clasificación de la información se llevará a cabo, entre otros supuestos, cuando se reciba una solicitud de acceso a la información, lo cual en el presente caso se actualiza. Por tanto, se admite a trámite la solicitud de clasificación.

A efecto de resolver sobre la presente solicitud, es necesario referir que la **Unidad de Enlace de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP)**, expone en lo medular, en su oficio de solicitud lo siguiente:

*«(...) Sirva este medio para enviar un cordial saludo, y de conformidad con el artículo 16 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, se solicita de*  
**RCT\_3435\_2024** Página 1 de 14



conformidad a lo previsto en el artículo 6° apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, fracciones XI y XXII, 25, fracciones VI y XV, 54, fracciones I y XII, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65 fracción I, 66, 70, 73, fracciones I, y IV, X y XII y 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato; 9, 10 y 16 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado; y 3, fracciones III y XV y 42, fracción V, 81 y 82 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato; así como en referencia a la solicitud de acceso a la información con el número de folio **61474**.

Al respecto, vengo a solicitar **SE CONFIRME LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE, POR MINISTERIO DE LEY, se encuentra clasificada como confidencial, respecto a si la persona de nombre que se establece en la solicitud de acceso a la información se encuentra recluida en determinado Centro Penitenciario**, lo anterior en base a los razonamientos siguientes:

**LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO**

**Artículo 7.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

**X. Información Confidencial:** Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, así como aquella señalada en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

**Artículo 58.** La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder se actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.

**Artículo 59.** Los titulares de las unidades administrativas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de realizar la declaración de inexistencia o de incompetencia, de solicitar la ampliación del plazo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información, y el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar dichas determinaciones de conformidad con la Ley General, a lo dispuesto por esta Ley y al Reglamento en la materia del sujeto obligado.

**Artículo 60.** En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.

(...)

**Artículo 76.** La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella quienes sean los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

**Artículo 77.** Se clasificará como información confidencial, la siguiente:

I. Los datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, debiéndose atender a lo previsto por la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato y a la Ley General en la materia;



III. La información que entreguen los particulares a los sujetos obligados de conformidad a las atribuciones o funciones según lo dispuesto por las leyes, sus reglamentos o los tratados internacionales.

**LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO**

Asimismo, el artículo 3, fracciones VII y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, establecen que:

«(...) **VII. Datos personales:** cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

**VIII. Datos personales sensibles:** aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles, de manera enunciativa más no limitativa, los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos, datos biométricos y preferencia sexual; (...)»

**LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.**

**Artículo 60.** En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, los titulares de las unidades administrativas deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño.

**Artículo 116.** Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

**LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.**

**Artículo 3.** Para efectos de este ordenamiento se entenderá por:

(...)



«(...) **VII. Datos personales:** cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad puede determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

**VIII. Datos personales sensibles:** aquellos que se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. Se consideran sensibles, de manera enunciativa más no limitativa, los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud pasado, presente o futuro, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas, datos genéticos, datos biométricos y preferencia sexual; (...)»

#### **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

##### **Artículo 6o.**

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

(...)

**II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.**

(...)

#### **CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO**

##### **Artículo 14.**

B. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Los derechos a la información pública y protección de datos personales serán garantizados por el Estado.

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, los Poderes, organismos autónomos y ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por las siguientes fracciones y bases:

(...)

**II.- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fije la ley;**

(...)

#### **CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS**

**Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión**



1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

(...)

**REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.**

**Estructura Administrativa de la Secretaría**

**Artículo 3.** Para el estudio, planeación, programación, ejecución y despacho de sus asuntos, la Secretaría contará con la siguiente estructura administrativa:

(...)

**III. Subsecretaría de Seguridad:**

(...)

**c. Dirección General del Sistema Penitenciario:**

**c.1. Dirección de Coordinación y Control de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social;**

**c.2. Dirección de Coordinación y Control Femenil de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social;**

**c.3. Direcciones de los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social; y**

**c.4. Dirección de Tecnologías de la Información y Control Penitenciario;**

Asimismo, los artículos 125, 126, 127 fracción IV de la **Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato**, que precisan:

**Capítulo II Registros de Información  
Integración**

**Artículo 125.** Los registros de la información, en materia de seguridad pública, estarán integrados por las políticas y actividades de planeación, instrumentos que se generen con motivo de la operación, personal y actividades de las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia, readaptación social y, en general, todas las instituciones que deban contribuir a la seguridad pública.

**Carácter de la Información**

**Artículo 126.** La información será manejada bajo el principio de confidencialidad y tendrá el carácter de reservada por tiempo indefinido. Estará disponible única y exclusivamente para consulta de las autoridades y servidores públicos autorizados por las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia y reinserción social, en el ejercicio de sus funciones, siguiendo los procedimientos que en el reglamento se establezcan.

**Tipos de registros de información**

RCT\_3435\_2024 Página 5 de 14



**Artículo 127.** La información a que se refiere el presente título, deberá integrarse en los registros siguientes:

(...)

IV. Los demás que las instancias competentes consideren necesarios para los fines de la presente Ley.

**LINEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS**

**Trigésimo octavo.** Se considera información confidencial:

I. Los datos personales entendidos como cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, en términos de la norma aplicable que, de manera enunciativa más no limitativa, se pueden identificar de acuerdo a las siguientes categorías:

- 1.- **Datos identificativos:** El nombre, alias, pseudónimo, domicilio, código postal, teléfono particular, sexo, estado civil, teléfono celular, firma, clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Clave de Elector, Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, localidad y sección electoral, y análogos.

(...)

- 7.- **Datos sobre situación jurídica o legal:** La información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, o de cualquier otra rama del Derecho, y análogos;

(...)

**La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna** y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Por lo que respecta al presente Lineamiento, es dable destacar que el caso concreto que nos ocupa, el peticionario solicita información respecto de datos que conciernen a una persona privada de la libertad, por lo cual el sujeto obligado que en su caso pudiera contar con esa información tiene la obligación de protegerla en los términos que la ley establece, pudiendo tener acceso únicamente los titulares de aquella, así como, excepcionalmente aquellos funcionarios que estén facultados para ello y en los supuestos que la norma lo determine. En ese sentido, el otorgar la información que se pretende puede vulnerar diferentes derechos humanos de la persona que se encuentra recluida, como lo es la protección de sus datos personales, situación jurídica e incluso su seguridad personal.

**Cuadragésimo primero.** Será confidencial la información que los particulares proporcionen a los sujetos obligados para fines estadísticos; que éstos obtengan de registros administrativos o aquellos que contengan información relativa al estado civil de las personas, no podrán difundirse en forma nominativa o individualizada, o de cualquier otra forma que permita la identificación inmediata de los involucrados, o conduzcan, por su estructura, contenido o grado de desagregación a la identificación





**GUANAJUATO**

GOBIERNO DE LA GENTE

UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DEL PODER EJECUTIVO

## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

individual de los mismos, en los términos que determine la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

En el orden de ideas del Lineamiento que antecede, y como bien lo determina el Lineamiento Trigésimo Octavo, el cual establece que aquella información que haya sido entregada por los titulares a los sujetos obligados para determinado fin o bien que se obtenga por la naturaleza y función de determinada atribución, no podrá hacerse pública, pues de hacerlo se podría identificar de manera individualizada y objetiva a la persona de quien se trate, vulnerando así diversos bienes jurídicos que se tiene la obligación de proteger en términos de la Constitución y las Leyes que de ella emanen; sin perder de vista que el estado se encuentra en una posición de garante respecto de los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta situación jurídica.

Con base a la normatividad referida, así como a las consideraciones previstas, esta Unidad Administrativa, considera pertinente llevar a cabo la solicitud de **CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN** como **CONFIDENCIAL**, que, por ministerio de ley, se le otorga tal carácter, exponiendo la siguiente:

En relación a la información que se solicita, es pertinente mencionar que de proporcionarse lo referente a **si la persona que se menciona en la solicitud de acceso a la información se encuentra recluida en determinado centro penitenciario**, representa un **RIESGO REAL, DEMOSTRABLE E IDENTIFICABLE**, toda vez que se daría acceso a información que además de identificar y afirmar los datos que se establecen en la solicitud, se estaría afirmando que esa persona se encuentra en determinada ubicación, dando pie a posibles ataques e incluso pretender sustraer a la misma.

Además de que los registros de información en materia de seguridad pública, tienen el carácter de confidencial por tiempo indefinido, tal y como lo establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública en su artículo 126, en relación con el 77, fracciones I y III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Cabe resaltar que las leyes y artículos específicos expresados al inicio de la presente petición, enuncian de forma precisa los casos en que la información debe ser considerada como confidencial; para el caso concreto es aplicable la parte de datos personales, pues de hacer pública la información se estaría revelando información referente a datos personales que permiten identificar plenamente a una persona e incluso determinar su ubicación, lo cual pudiera repercutir de forma negativa en su esfera de derechos.

Es importante destacar que el vínculo que existe entre la información como la que se pretende conocer y el daño que se generaría al darla es evidente, pues al conocer los datos en comento se pueden generar vulneraciones a la protección de datos de la persona titular que pudieran estar contenidos en diversas bases de datos, así como permitir objetivamente su identificación y ubicación; dado que existe obligación expresa, a la cual están constreñidos los sujetos obligados que posean información, en términos de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.

En ese mismo sentido, destacar que los argumentos anteriormente argüidos tienen como fin desentrañar el daño que se causaría a la persona física en el caso de hacer pública y confirmar la información como la que se pretende, causando así un daño evidente a su esfera jurídica.

Por **MINISTERIO DE LEY**, la información que se solicita, tiene el carácter de **CONFIDENCIAL**, por tratarse de datos personales respecto de una persona identificada o identificable.





*En el caso concreto se debe tomar en consideración que, de proporcionar la información referente a la situación jurídica de la persona (en caso de que existiera) se estaría realizando una intromisión a su esfera jurídica e incluso a su intimidad, la cual esta apartada de la proyección pública, es decir, no incumbe (bajo ciertas excepciones) la vida privada de determinada persona al público en general, dado que se encuentra en una esfera íntima, la cual debe dársele vigencia y protección por parte del Estado, sin dejar de resaltar que el caso concreto se refiere probablemente a datos sobre una persona privada de la libertad.*

*Las Tesis y criterios derivados de amparos resueltos por la Tribunales Colegiados dan certeza jurídica del tema en cuestión.*

**INFORMACIÓN PÚBLICA. ES AQUELLA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO. \***

*Dentro de un Estado constitucional los representantes están al servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los gobernantes, de donde se sigue la regla general consistente en que los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. En ese tenor, información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, obtenidos por causa del ejercicio de funciones de derecho público, considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de éstos de rendir cuentas y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.*

*Contradicción de tesis 333/2009. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Décimo Tribunal*

*Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de agosto de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García.*

**LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA INTIMIDAD. PARÁMETROS PARA RESOLVER, MEDIANTE UN EJERCICIO DE PONDERACIÓN, CASOS EN QUE SE ENCUENTREN EN CONFLICTO TALES DERECHOS FUNDAMENTALES, SEA QUE SE TRATE DE PERSONAJES PÚBLICOS O DE PERSONAS PRIVADAS.\***

*La libertad de expresión y el derecho a la información operan en forma diversa tratándose de personajes públicos, quienes, como las personas privadas, se encuentran protegidos constitucionalmente en su intimidad o vida privada, por lo que podrán hacer valer su derecho a la intimidad frente a las opiniones, críticas o informaciones lesivas. La solución de este tipo de conflictos ameritará un ejercicio de ponderación entre los derechos controvertidos, a efecto de determinar cuál de ellos prevalecerá en cada caso. Así, el interés público que tengan los hechos o datos publicados, será el concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad, en donde el derecho a la intimidad debe ceder a favor del derecho a comunicar y recibir información, o a la libertad de expresión cuando*



*puedan tener relevancia pública, al ser un ejercicio de dichos derechos la base de una opinión pública libre y abierta en una sociedad. Por consiguiente, en la solución al conflicto entre la libertad de expresión y el derecho a la información, frente al derecho a la intimidad o a la vida privada, deberá considerarse el caso en concreto, a fin de verificar cuál de estos derechos debe prevalecer distinguiéndose, en el caso de personas públicas a la mayor o menor proyección de la persona, dada su propia posición en la comunidad, así como la forma en que ella misma ha modulado el conocimiento público sobre su vida privada.*

Amparo directo 6/2009. 7 de octubre de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Laura García Velasco y José Álvaro Vargas Ornelas.

**DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA.**

*Dentro de los derechos personalísimos se encuentran necesariamente comprendidos el derecho a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y entendiéndose por el primero, el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos; a la propia imagen, como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás; a la identidad personal, entendida como el derecho de todo individuo a ser uno mismo, en la propia conciencia y en la opinión de los demás, es decir, es la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad, de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la sociedad y permiten identificarlo; y que implica, por tanto, la identidad sexual, al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no sólo en cuanto a sus preferencias sexuales sino, primordialmente, en cuanto a cómo se percibe él, con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que, de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada individuo, proyectará su vida en todos los ámbitos, privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.*

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El Tribunal Pleno, el diecinueve de octubre en curso, aprobó, con el número LXVII/2009, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a diecinueve de octubre de dos mil nueve.

*En ese sentido, es que el Estado tiene la obligación de salvaguardar y proteger los derechos humanos en el presente caso particular, así como también de forma general para con todos los ciudadanos. Para el caso que nos ocupa, es viable que ese comité lleva a cabo la confirmación de la clasificación de la información como confidencial, toda vez que así no se estaría dando pauta a que se lesionen bienes jurídicos protegidos,*



## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

como lo es derecho a la intimidad, protección de datos personales, seguridad jurídica, entre otros; los cuales están protegidos tanto Constitucionalmente como por Tratados Internacionales en la materia, los cuales forman parte de nuestra normativa interna.

Ahora bien, analizando los puntos a los que hace referencia el tema que nos ocupa, el derecho de acceso a la información, establecido dentro de los derechos humanos plasmados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la obligatoriedad de dar respuesta a las peticiones de quien lo requiera, así mismo no debemos de perder de vista que en el caso en concreto el derecho humano tiene limitantes establecidas en la misma Constitución, dicha limitante deberá estar prevista en la ley, así como estar debidamente fundada y motivada; hasta en este momento podremos deducir que ese límite al derecho humano es legítimo, ya que tiene como fin la protección de un bien jurídico mayor.

El derecho de acceder a la información que está en manos de las autoridades públicas es un derecho humano fundamental que debe darse vigencia a nivel nacional, estatal y municipal mediante legislación integral en base al principio de transparencia máxima, estableciendo la suposición de que toda la información está accesible con sujeción a las penas y un sistema de excepciones. Por ello debe entenderse que cuando de la propagación o publicación de la información pueda derivar en un perjuicio en contra de derechos humanos de terceros o de la sociedad en general, aquella información deberá mantenerse como reservada, para así evitar un daño mayor que la restricción al derecho de acceso a la información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los artículos 125, 126 y 127 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato, donde establece que tipo de información es confidencial, la cual no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello; por ello al no proporcionar la información solicitada se estaría cumpliendo con lo que establece la norma, ya que por ministerio de Ley tiene el carácter de confidencial, evitando con ello se deje en estado de indefensión y vulnerabilidad a la persona física en cuestión.

No pasa desapercibido que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, dado que se establecen restricciones legítimas derivado de un ejercicio de ponderación, en caso de que se actualice alguno de los supuestos de restricción, al caso concreto, lo concerniente a información de carácter confidencial de conformidad con la causal invocada y cuando por Ministerio de Ley se establezca que la información tiene ese carácter, configura una restricción, siendo por tanto lo expuesto en supra líneas, un fin válido o legítimo consagrado en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 77 fracciones I y III de la Ley local.

Y toda vez que lo antes expuesto se encuentra ya regulado por la Ley, como se citó en el punto anterior y no contraviene a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como se ha desarrollado este presupuesto implica que toda medida debe ser adecuada o idónea para fomentar la obtención de un fin constitucionalmente legítimo.

Es razonable tal petición, considerando los puntos expuestos con antelación y sometidos a su consideración y análisis, toda vez que fueron fundados y motivados al caso concreto que nos ocupa, por lo cual se solicita **LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO CONFIDENCIAL.**

Por tal motivo, se solicita al Comité de Transparencia:

**Primero.** - En virtud de lo anterior, y al ser la confirmación de la clasificación de la información, en el caso que nos ocupa, el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio a la esfera jurídica de la persona



titular de los datos personales; en concordancia con los artículos 76 y 77, fracciones I y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Así como el **artículo 5** de la misma Ley en cita, en cuanto a que la información pública deberá ser, entre otros, completa y oportuna; además que con ello no se afecte el interés público, es que esta Unidad Administrativa considera viable llevar a cabo la solicitud **DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO CONFIDENCIAL**, que se le solicita.

**Segundo.** - Se confirme la clasificación como información **CONFIDENCIAL**, respecto a los datos personales a que se hace referencia en la solicitud de acceso a la información en cuestión.

**Tercero.** - En términos del periodo de clasificación de la información es menester ser reiterativo ya que la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella quienes sean los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

**Cuarto.** - Siendo evidente que en la especie se cumple con lo preceptuado, ya que se han expuesto los fundamentos y motivos que justifican la solicitud de confirmación de clasificación que se formula, por lo que se pide a ese Comité, sean muy servidos en valorarlos de manera amplia, para que sea procedente la petición.

Sin más por el momento, me despido agradeciendo la atención al presente.

(...)»

**TERCERO. ANÁLISIS DE LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.** A efecto de determinar si procede o no la solicitud de clasificación como información confidencial, es menester precisar que, si bien, el artículo 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Apartado A, fracción I, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad –el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, para el caso que nos ocupa- es pública, también su fracción II refiere que esta puede ser de acceso restringido tratándose de la vida privada y los datos personales.

Para robustecer lo anterior, sirve de sustento lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis [A] publicada en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 74, con registro digital 191967<sup>1</sup>, misma que a la letra refiere [lo resaltado y subrayado no es de origen]:

**«DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas**

<sup>1</sup> Disponible para su consulta en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/191967>



**constitucionales y legales**, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio **encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera**; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.»

Asimismo, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su tercer párrafo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De igual manera, la fracción II del Apartado A del artículo 6o. de la multicitada Constitución, refiere que, la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Además, es importante mencionar que **el derecho a la vida privada (o intimidad)** que abarca la protección de datos personales, está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11).

Por tal motivo, tal y como lo refirió la Unidad Administrativa que clasifica, la información solicitada forma parte de los registros de información en materia de seguridad pública en términos del artículo 125 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, precisando además el similar 126 de la misma Ley, que dichos registros serán manejados bajo el principio de confidencialidad y tendrán el carácter de reservados por tiempo indefinido, siendo única y exclusivamente para consulta de las autoridades y servidores públicos autorizados por las instituciones de prevención, procuración y administración de justicia y reinserción social, en el ejercicio de sus funciones, siguiendo los procedimientos que en el reglamento se establezcan.

Así también, el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los principios rectores del sistema penitenciario, entre ellos, el de confidencialidad, el cual refiere que el expediente personal de la persona privada de su libertad tendrá trato confidencial, de conformidad con la ley en la materia, y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, la persona privada de la libertad y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso salvo las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables.

En consecuencia, la información solicitada reviste el carácter de confidencial por ministerio de ley, además, que el solo hecho de pronunciarse sobre la misma, puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de la persona titular, ya que pudieran dar con su ubicación, dando pie a posibles ataques o la sustracción de la misma –de ser el caso–, por tanto, se considera de carácter sensible, en el entendido de que los datos personales sensibles son aquellos que se refieren a la esfera más íntima



de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste<sup>2</sup>, situación que, además, puede ocasionar un daño moral a una persona física.

Sirve de sustento a lo anterior, criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis [A]: 1a. XXXIV/2019 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 65, Tomo I, página 787, abril de 2019, con registro digital: 2019714, misma que refiere:

**«DAÑO MORAL. SU EXISTENCIA POR LA AFECTACIÓN DEL DERECHO AL HONOR EN SU VERTIENTE DE BUENA REPUTACIÓN, NO GOZA DE PRESUNCIÓN, SINO QUE DEBE ACREDITARSE.**

*El derecho humano al honor, como parte del bloque de los denominados derechos de la personalidad, comprende en su dimensión objetiva, externa o social, a la buena reputación, y ésta tiene como componentes, por una parte, las buenas cualidades morales o profesionales de la persona, que pueden considerarse valores respecto de ella y, por otra, la buena opinión, consideración o estima, que los demás tengan de ella o para con ella por esos valores, y que constituye un bien jurídico de su personalidad, del cual goza como resultado de su comportamiento moral y/o profesional; por ende, la buena reputación si entraña un derecho que asiste a todas las personas por igual, y se traduce en la facultad que cada individuo tiene de exigir que otro no condicione negativamente la opinión, consideración o estima que los demás se han de formar sobre él. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tanto las personas físicas como las morales cuentan dentro de los derechos de su personalidad, con el derecho al honor y a su buena reputación, por lo que tienen legitimación para emprender acciones de daño moral cuando esos bienes jurídicos son lesionados. Así, cuando se juzguen actos ilícitos concretos que potencialmente puedan lesionar el derecho al honor en su vertiente de buena reputación, no es acorde con el contenido y alcance de ese derecho sostener que pueda exigirse al accionante que demuestre la existencia y magnitud de una previa buena reputación, pues ello implicaría negar a ésta la naturaleza de derecho fundamental, además, porque es inherente a ese derecho presumirla por igual en todas las personas y en todos los casos, y partir de la base de su existencia para determinar si los hechos o actos ilícitos materia del litigio afectaron esa buena reputación. Ahora bien, la existencia del daño moral derivado de la afectación a ese derecho es una cuestión distinta, respecto de la cual no es posible sentar su presunción, como una premisa inherente a su definición, contenido y alcance, sino que debe acreditarse, porque la presunción de daño en que se sustenta la denominada teoría de la prueba objetiva, se justifica en dos razones esenciales: 1) la imposibilidad o notoria dificultad de acreditar mediante prueba directa la afectación, derivado de la naturaleza intangible e inmaterial de ésta; y, 2) la posibilidad de establecer la certeza de la afectación como consecuencia necesaria, lógica y natural u ordinaria, del acto o hecho ilícito; condiciones que no necesariamente se actualizan cuando se aduce afectación a la buena reputación, ya que ésta implica la existencia de factores o elementos externos y la intervención de otras personas, según el tipo de interacción o relación existente entre éstas y el afectado, que son susceptibles de expresión material y, por tanto, objeto de prueba directa que la acredite.»*

Tan es así, lo referido anteriormente, que los propios Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en su numeral **Trigésimo octavo**, fracción I, establece algunas categorías de datos personales, entre las que se encuentran los datos identificativos y sobre situación jurídica, que contemplan –entre otros– el nombre, así como la información relativa a una persona que se encuentre o haya sido sujeta a un procedimiento penal, respectivamente.

<sup>2</sup> Artículo 3, fracción VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.



## Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo

Por lo expuesto y fundado; se

### RESUELVE:

**PRIMERO.** Se **confirma la confidencialidad** de la información solicitada, en los términos de los considerandos Segundo y Tercero. Lo anterior, con motivo de la solicitud tramitada bajo el folio interno **61474**, correspondiente al folio PNT **111100500409924**.

**SEGUNDO.** Notifíquese la presente resolución a la Unidad de Enlace y a la Unidad de Transparencia del Poder Ejecutivo y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así lo resolvió el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, por unanimidad de votos de sus integrantes, quienes firman al margen y al calce del presente resolutivo.



**Aura Fabiola Romero Fonseca**

Presidenta del Comité de Transparencia del  
Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato



**Rocío Sandoval Galván**

Vocal del Comité de Transparencia del Poder  
Ejecutivo del Estado de Guanajuato



**Jorge Antonio García Rocha**

Vocal del Comité de Transparencia del Poder  
Ejecutivo del Estado de Guanajuato